

LOS FALSOS ERRORES

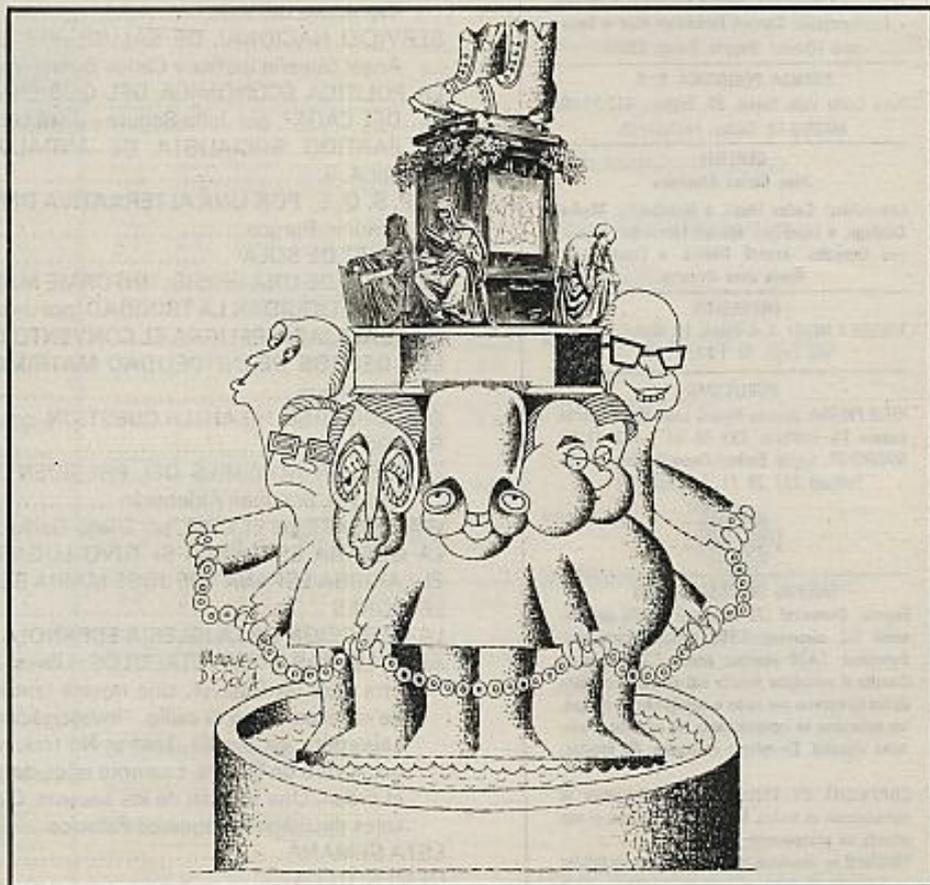
SE nos está llevando paso a paso hacia una semidemocracia —o semiautocracia— de corte eminentemente burgués y acentuadamente conservador. Difícilmente, en esta primera fase, se va a pasar de ahí. Hay que pensar que el Jefe del Estado querría ir más allá, incluso el actual Gobierno pretendería añadir datos de mayor formalidad democrática a su leve reforma, según las palabras que repiten frecuentemente sus miembros. Pero el conjunto de grandes poderes instalados en el país no permite más. El Gobierno no tiene la capacidad de transformar esas esferas de poder. Habrá que atribuir a ellas una serie de sucesos de la última semana: desde una serie de detenciones, hasta la sonora, espectacular suspensión del Congreso del PSOE. Probablemente las detenciones practicadas tienen un apoyo en la actual legalidad: las mismas personas podrían haber sido detenidas hace uno, dos o tres meses. La elección de este momento indica un endurecimiento en las actitudes de tolerancia. En ese sentido está la suspensión —una prohibición matizada, irresoluta— del Congreso de los socialistas.

ES curioso cómo, con respecto a este último hecho, la mayor parte de los órganos de expresión insisten en su opinión de que se trata de un error, de una equivocación del Gobierno. Como si el Gobierno no supiera lo que pierde con una actuación semejante, con otras actuaciones —como la de no resolver los problemas del terrorismo de derechas, principalmente en el País Vasco— y con otras omisiones. El error de la prohibición del Congreso del PSOE consiste esencialmente en que se mina la credibilidad democrática del Gobierno en el interior y en el exterior: en el interior, porque se trata de un partido moderado, con adeptos en clases sociales que no son solamente las de los trabajadores; en el exterior, porque la Internacional Socialista tiene mucha fuerza en varios Gobiernos y en todos los Parlamentos de Europa, y no acaba de entender cómo se puede ir conduciendo el país hacia una democracia formal y, al mismo tiempo, impedir la libre formación de los partidos, la discusión en su seno de las ten-

dencias y las líneas, la elección de las Juntas Directivas. Explicarle al Gobierno que ha cometido un error puede ser fruto, principalmente, de la soberbia periodística, del deseo final de que este Gobierno "lo haga bien" o de informar a los lectores de lo que se supone un fallo. Pero, ¿cómo no van a saber el presidente del Gobierno y sus ministros, especialmente el de Asuntos Exteriores, lo que supone esa prohibición?

COMO saben perfectamente el destrozo continuo que se está haciendo de las libertades políticas en el país por la vía de las limitaciones —o supresiones— de actos, reuniones, del uso de la televisión y la radio. Mientras todo ello está al servicio de una derecha ultraconservadora, como la que acaba de formarse, la llamada Alianza Popular. También sabe el Gobierno que, a plazo inmediato —en el plazo electoral que él mismo se ha fi-

jado—, tiene mucho más que temer de esta derecha, incrustada ya en la Administración, en las Cortes, que de una izquierda vacilante y desunida. Tiene que temer de esa derecha conservadora y cerrada que le hunda su proyecto de Ley de Reforma en las actuales Cortes, que lo transforme en una nueva ordenación de la democracia orgánica que se deseaba ya desaparecida, que llegue a incorporar las sugerencias hechas en el Consejo Nacional. Y que, tras lo que quede de esa reforma, se quede con el poder visible —ya tiene el invisible— en unas elecciones donde, por su falta de medios y sus limitaciones de legalidad, van a tener muy poco que hacer el centro —real— y la izquierda. Las presiones que el Gobierno trata de ejercer sobre los procuradores, por muy diversos medios, para que aprueben su reforma son demostrativas de su falta de fuerza frente a esos poderes, a los que ha tenido que





sacrificar el preámbulo de su proyecto de Ley —más teóricamente abierto que el articulado mismo— y entregar las sugerencias del Consejo Nacional; a los que ha tenido que ceder para no reformar por Decreto-Ley y para suavizar las medidas del trámite de urgencia. Entre esas presiones está la de la suspensión de la prórroga de las Cortes, con lo que quedarían automáticamente disueltas. Pero, ¿cómo se sustituirían después? ¿Por el sistema orgánico actual? ¿Adelantando las elecciones tras un referéndum, siempre sin vigencia de la oposición democrática? ¿Gobernando por Real Decreto hasta las elecciones? Las opciones legales son muy escasas.

SI nos detenemos un poco en esta gran derecha cerrada que se forma con el nombre de Acción Popular, nos encontraremos con esa gran nadería política que siempre entusiasma al núcleo conservador. No podríamos dejar de observar la típica frase-clave pronunciada en Barcelona por uno de los "siete", don Gonzalo Fernández de la Mora: Acción Popular ha nacido "para salvar a España". Es una frase naturalmente repulsiva. El monopolio de la "salvación" de España no pertenece a ningún grupo político, y la idea de que todos los demás están poniendo en peligro al país es inadmisibles. Pero corresponde a un estilo, a un estilillo remedado de todos los movimientos políticos de la ultraderecha en la Europa de este siglo. Está enlazado con la acumulación de la propiedad y supone el entendimiento del país como una finca. Un coto privado. Con más tosquedad aún, hizo la presentación

de esta alianza electoral el señor Fraga Iribarne. Parecería también un error de la derecha el ser presentada por quien tiene todos los vicios públicos de la derecha: el habla cortante, despótica y despectiva, el sentido personal del poder. Cualquiera de los "siete" —incluido, desde luego, el señor Fernández de la Mora— podría haber sido más capaz que don Manuel Fraga Iribarne. Pero no se puede tampoco considerar este "error" como tal: responde a una visión general de la política, al juego de un reflejo de autoridad y de poder cuando se está queriendo desprestigiar a un Gobierno porque no lo tiene.

ESTA claro que esta gran derecha, este dragón de siete cabezas, va a tener muchas oportunidades en el futuro inmediato. Es capaz de atraer a una gran masa de conservadores desorientados, que se están alarmando con las circunstancias actuales del orden público. Es, sobre todo, muy capaz de beneficiarse de los grandes canales del franquismo, contruidos por ellos mismos en etapa de poder —larga, en muchos de ellos— y por sus aliados, por sus correligionarios. La izquierda suele minimizar esta alianza por su carácter heterogéneo, por las discrepancias que pueda haber no sólo entre sus dirigentes, sino entre sus seguidores: supondrían que a la hora de votar a uno de ellos, les repugnaría hacerlo por uno, varios o todos los demás. Esto supone olvidar que la derecha es una alianza de intereses y que no tiene los prejuicios doctrinales que pueda tener —que está teniendo— la oposición democrática.

ESTA oposición democrática está atravesando por un mal paso. No encuentra la vía para representar un papel auténtico de oposición. No encuentra la forma de estar unida entre sí. Los "errores" del Gobierno la han ido forzando a una busca de posiciones ambiguas, entre las cuales estaría la de la aceptación de la legalidad ofrecida por el Gobierno —a la cual estaría ya inclinada la Izquierda Democrática del señor Ruiz-Giménez— o la permanencia en una oposición que podría eternizarse. Esta disyuntiva es enormemente grave. La aceptación de la legalidad ofrecida, el "pase por ventanilla", supondría un oportunismo, una desnaturalización de sus propias doctrinas e ideologías. Pero, ¿no sería práctico ayudar al Gobierno a deshacerse de la gran derecha? La duda está, entonces, en si lo que haría sería en realidad un colaboracionismo, un papel de comparsa. El encastillamiento en la oposición a ultranza traería, en cambio, una desunión mayor, una exasperación de cada grupo. Por eso, la oposición democrática pretende obtener del Gobierno, por lo menos, dos ventajas: una utilización realmente neutral de los medios de comunicación gubernamentales —televisión, radio, prensa estatal— y una organización de elecciones que fuera realmente limpia. Pero, ¿puede hacer esa oferta —o recibir esas demandas— el Gobierno actual? ¿Tiene la suficiente capacidad de maniobra dentro de los grupos de poder como para llegar a ese pacto?

MUCHO hay que temer que no. La realidad objetiva del país es que está ocupado y determinado, hasta ahora, por los creadores y sostenedores del Régimen anterior, y que éstos no están aceptando de ninguna manera la necesidad de transformación para homologar al país, aun precariamente, a los sistemas occidentales de democracia política, de democracia económica y de democracia social, y que parece que tienen fuerza suficiente como para impedir que se vaya más adelante. El problema es que este país que así quieren "salvar", puede ser inviable, y está siéndolo ya si juzgamos por los problemas sociales y económicos que se nos echan encima. Pero el conservadurismo es lo que indica su nombre: una conservación. Y su corrupción está en que, por conservar formalmente, se les vaya todo de las manos. No parece que estén dispuestos a darse cuenta, o su "error" les parece lo suficientemente rentable como para mantener todas las obstrucciones que están manteniendo. O su inteligencia no da más de sí.